ROBERTO MUÑOZ BOLAÑOS

GUERNICA

UNA NUEVA HISTORIA

Las claves que nunca se han contado

ESPASA

Roberto Muñoz Bolaños

Guernica. Una nueva historia

Las claves que nunca se han contado

ESPASA

© Roberto Muñoz Bolaños, 2017
© Fernando María Puell de la Villa, por el prólogo, 2017
© Espasa Libros, S. L. U., 2017

Mapas de Jesús Sanz

Depósito legal: B. 338-2017
ISBN: 978-84-670-4926-8

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Espasa, en su deseo de mejorar sus publicaciones, agradecerá cualquier sugerencia que los lectores hagan al departamento editorial por correo electrónico: sugerencias@espasa.es.

www.espasa.com
www.planetadeloslibros.com

Impreso en España/*Printed in Spain*
Impresión: Rodesa, S. A.

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como **papel ecológico.**

Espasa Libros, S. L. U.
Avda. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona

Índice

Prólogo, de Fernando Puell de la Villa 13
Listado de siglas 17
Agradecimientos 19

1. Las primeras conspiraciones de 1936: militares, carlistas y nacionalistas vascos 23
   El universo conspirativo español (1931-1935) 23
   Militares y carlistas 30
   El PNV y el proyecto carlista de 1936 37

2. La conspiración de Mola: *El Director,* Franco, el PNV, Italia y Alemania 51
   Mola, *El Director* 51
   Navarra y las provincias vascas en el plan de Mola 58
   El PNV en la encrucijada 64
   Conclusión: la situación el 17 de julio de 1936 66

3. Sublevación y guerra en Navarra y el País Vasco: el ascenso al poder de Aguirre y Franco 69
   La sublevación en Navarra y el País Vasco 69
   La actitud del PNV frente a la sublevación: triunfa el miedo 76
   Guerra y negociación en el verano de 1936 81
   Franco y Aguirre en el poder: 1-7 de octubre de 1936 88

4. Guerra total y poder aéreo 93
   El concepto de guerra total 93

El poder aéreo: Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, Alemania y España 98
Conclusiones 111

5. Guerra total en el norte: el bombardeo de Durango (31 de marzo de 1937) 115
La Legión Cóndor y la *Aviazione Legionaria:* instrumentos de guerra total 115
Tensiones en el bando sublevado: Mola y el surgimiento del «partido militar» 124
Guerra y negociación en Vizcaya hasta febrero de 1937 131
La campaña del norte: guerra total y poder aéreo en Vizcaya 139
El bombardeo de Durango (31 de marzo de 1937) 148

6. Guerra total en el norte: el bombardeo de Guernica 159
Guerra, unificación y negociación 159
El bombardeo de Guernica 172
Durango, Guernica y la guerra total 210

7. Después de Guernica 213
El impacto internacional del bombardeo: los corresponsales, el papel del Reino Unido y la invención de una historia 213
Rebeldes y nacionalistas: la muerte del general Mola y el pacto de Santoña 222
Von Richthofen y las enseñanzas de la guerra en España 226

Conclusión 229
Notas 233
Fuentes y bibliografía 281
Índice onomástico 295

1
Las primeras conspiraciones de 1936: militares, carlistas y nacionalistas vascos

El universo conspirativo español (1931-1935)

Desde el 14 de abril de 1931, determinados grupos políticos y de la élite militar tomaron la decisión de enfrentarse violentamente contra el proyecto revolucionario[1] que representaba la Segunda República, conformándose cinco núcleos conspirativos[2]:

Los monárquicos alfonsinos

Aunque divididos entre neoconservadores y neotradicionalistas[3], los seguidores de la rama borbónica isabelina tenían por objetivo la sustitución de la Segunda República por una nueva monarquía —alejada de los principios del liberalismo clásico—, mediante un golpe de Estado militar. Sus postulados tenían un fuerte predicamento entre la aristocracia y la alta burguesía española, y ejercían una gran propaganda a través de publicaciones como los diarios *ABC, La Época* o la revista cultural *Acción Española*. Su organización política, denominada Renovación Española (RE), estaba presidida por Antonio Goicoechea, aunque el verdadero líder civil del grupo era el carismático José Calvo Sotelo,

mientras la rama militar la lideraba inicialmente el primorriverista teniente general Emilio Barrera Luyando. Fueron los responsables del fracasado golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, conocido como «La Sanjurjada», por la participación en el mismo del teniente general José Sanjurjo Sacanell[4], cuyo prestigio en el Ejército era inmenso. Tras este fracaso, los alfonsinos crearon una nueva organización conspirativa dirigida por el coronel del Estado Mayor Valentín Galarza Morante, conocido como el Técnico[5], y pidieron al famoso teniente general Severiano Martínez Anido, que se encontraba exiliado en Francia, que fuera su jefe[6]. Ante la negativa de este, recurrieron de nuevo a Barrera —muy desprestigiado tras el fracaso del 10 de agosto de 1932— para que volviera a encabezarla. Si bien este grupo se mostró muy activo, integrando en el mismo tanto a militares retirados —los tenientes generales Barrera y Martínez Anido, o los generales de brigada de Ingenieros Miguel García de la Herrán y de Caballería Miguel Ponte y Manso de Zúñiga— como en activo —el general de brigada de Infantería Luis Orgaz Yoldi, el de Ingenieros Alfredo Kindelán Duany, o el propio Galarza—, sus ideas no tenían una gran influencia en el resto del Ejército, salvo algunos generales —posteriormente claves en el ascenso al poder del general de división Francisco Franco Bahamonde—, lo que hacía casi imposible que un golpe de Estado militar estrictamente monárquico tuviera éxito.

Los monárquicos carlistas

Este grupo político, articulado en la Comunión Tradicionalista (CT), era partidario de una monarquía «neotradicional», encabezada por la rama del infante Carlos María Isidro (1788-1855). Su labor conspirativa había comenzado en 1833 y se incrementó durante el periodo de la Segunda República como consecuencia del carácter laico y no monárquico de este régimen. De ahí que,

a partir de 1934, se produjera la reorganización de su milicia, el «Requeté», de la mano de Manuel Fal Conde y José Luis Zamanillo, delegados nacionales del pretendiente Alfonso Carlos y del Requeté, respectivamente. En este proceso desempeñaría un papel importante el entonces coronel de Infantería José Enrique Varela Iglesias, conocido en la clandestinidad como el cura *Don Pepe*[7]. Sin embargo, a pesar de esta labor, la milicia carlista no era una organización militar efectiva. La creación de un Ejército es un proceso muy complejo, incluso cuando se le entrena exclusivamente para la guerra de guerrillas. Y este proceso no se había concluido cuando empezó la Guerra Civil en julio de 1936. Así lo reconocía uno de los líderes militares del carlismo, el teniente coronel del Estado Mayor Eduardo Baselga en mayo de ese mismo año: «Teniendo en cuenta la falta de preparación, de hábitos de obediencia, ninguna o escasa experiencia guerrera […]»[8]. Además, desde 1934, los carlistas eran cada vez más influyentes en el entorno de Sanjurjo[9], exiliado en Estoril (Portugal) tras la amnistía promulgada ese año, y convertido ya en el centro de todas las conspiraciones contra la Segunda República. No obstante, a pesar de contar con una milicia —a la que los conspiradores militares posteriores darían cierta importancia— y de tener una relación fluida con Sanjurjo, un golpe de Estado militar carlista era una quimera, ya que no tenían ninguna influencia en el Ejército. Por esta razón, y a pesar de que su relación con los alfonsinos era conflictiva[10], ambos grupos —representados por los miembros de Comunión Tradicionalista Antonio de Lizarza y Rafael de Olazábal, y los alfonsinos Goicoechea y el teniente general Barrera— habían firmado un pacto con Benito Mussolini, en Roma el 31 de marzo de 1934. Por este acuerdo, el dictador italiano se comprometía a apoyar a los dos partidos monárquicos con armas y dinero para que derribasen la Segunda República, y, a cambio, el nuevo Gobierno que surgiese después, firmaría una serie de pactos con Italia que reforzarían la posición geoestratégica de este país en el mar Mediterráneo[11]. Este pacto implicaba la intervención

de una potencia extranjera en los asuntos españoles, y, como afirma Viñas, sería resucitado en 1936[12].

Los constitucionalistas

Se trataba de un curioso grupo cívico-militar gestado en el año 1930 en torno a las figuras de Melquíades Álvarez[13], Manuel Burgos y Mazo[14] y, sobre todo, el general de división Manuel Goded Llopis, «africanista» y, tal vez, el militar de mayor prestigio técnico del Ejército[15]. Su propósito inicial era la convocatoria de unas elecciones donde el pueblo español decidiese la forma de Estado, pero tras la proclamación de la Segunda República el 14 de julio de 1931, el grupo se disolvió. Sin embargo, lo que ellos denominaban «política radical del Gobierno de Manuel Azaña Díaz» durante el llamado «bienio reformista» (1931-1932), volvió a reunirles con el mismo programa, incorporando al mismo a republicanos conservadores como Alejandro Lerroux, jefe del Partido Republicano Radical (PRR) y hombre contrario a Azaña[16]. Su objetivo era dar un golpe de Estado y establecer una república de orden. Para lograrlo, contaron inicialmente con tres grandes figuras militares: Goded, Miguel Cabanellas Ferrer, amigo y correligionario de Lerroux hasta el punto de que fue diputado radical por Jaén en 1933, y, sobre todo, Sanjurjo[17]. Este importante militar se había enemistado con el Gobierno de Azaña tras los sucesos de Arnedo y Castilblanco[18], y fue cesado como director general de la Guardia Civil. Para sustituirle fue nombrado precisamente Cabanellas, mientras Sanjurjo pasaba a dirigir los Carabineros (guardias de fronteras). El golpe planeado por los constitucionalistas no pudo llevarse a cabo tras el cese de Goded como jefe del Estado Mayor Central (EMC), consecuencia del célebre incidente de Carabanchel[19]. Ante esa tesitura, Sanjurjo decidió vincularse a los monárquicos, participando en el golpe de Estado del 10 de agosto de 1932. Tras el fracaso de esta opera-

ción, el grupo constitucionalista como tal desapareció como núcleo conspirativo independiente. Pero, a la vez, dejó a Cabanellas y, especialmente, a Goded —convertido, a partir de 1932, en el gran conspirador[20]—, libres de toda culpa, lo que sería determinante en la sublevación de julio de 1936.

La Unión Militar Española (UME)

Este grupo conspirativo, que recordaba a las antiguas Juntas de Defensa, fue fundado por dos militares retirados, el capitán del Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández, y el teniente coronel de Infantería Emilio Rodríguez Tarduchy, a finales de 1933[21]. Se trataba de una organización integrada única y exclusivamente por jefes y oficiales[22], y partidaria de llevar a cabo un golpe de Estado que pusiera fin a la Segunda República. Sin embargo, aunque sus miembros pertenecían a la extrema derecha, como organización carecía de unidad ideológica. Así, Tarduchy era un primorriverista que evolucionó hacia el falangismo, mientras que Galarza y Barba eran monárquicos. En todo caso, a pesar de esta diversidad ideológica, la UME fue capaz de crear una Dirección Central en Madrid, presidida por Barba, y direcciones regionales en cada una de las ocho divisiones orgánicas. Entre las principales actividades que realizaron sus miembros, destacaba la propaganda derechista en las guarniciones mediante circulares y libros, como el muy famoso de Mauricio Karl, *El enemigo: marxismo, anarquismo, masonería*. Sin embargo, la UME como organización no podía dar un golpe de Estado si no contaban con el apoyo de los generales. De ahí que muy pronto entraran en contacto con Goded, a través de su ayudante, y miembro de la organización, el comandante de Infantería Carlos Lázaro, estableciendo una sólida relación con él[23].

En 1936, la UME se convertiría en un útil auxiliar para la conspiración que entonces se puso en marcha.

La Junta de Generales

Poco después del golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, se creó en Madrid una Junta de Generales. Estaba presidida por Goded, y la integraban generales monárquicos, como los ya citados Varela y Orgaz, y otros que no lo eran, como los de división Joaquín Fanjul, Rafael Villegas Montesinos y José Rodríguez del Barrio. El objetivo de esta Junta no era tanto la destrucción de la República mediante un golpe de Estado como acabar con el Gobierno de Azaña[24].

* * *

Por tanto, desde 1931, habían ido apareciendo una serie de núcleos conspirativos dispuestos a cambiar el sistema político español, en los que destacaban dos figuras militares claves y enemistadas personalmente[25]: Sanjurjo, considerado el líder del Ejército y el elemento fundamental de cualquier sublevación para carlistas y alfonsinos, y, sobre todo, Goded, cabeza de la Junta de Generales y con excelentes relaciones en la UME.

Sin embargo, estas tramas conspirativas habían pasado por una situación de *impasse* tras la revolución de octubre de 1934, pues la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) había entrado en el Ejecutivo en coalición con el Partido Republicano Radical, convirtiéndose su líder, José María Gil-Robles y Quiñones, en ministro de la Guerra el 6 de mayo de 1935. Desde el primer momento, este político se apoyó en africanistas, como los generales de división Francisco Franco Bahamonde, Fanjul y Goded, a quienes nombró jefe del Estado Mayor Central, subsecretario del Ministerio de la Guerra e inspector general del Ejército y director general de la Aeronáutica Militar, respectivamente, o el de brigada de Infantería Emilio Mola Vidal, que se convirtió en jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos. En estas circunstancias, la posibilidad de desencadenar una sublevación

contra el régimen republicano se convirtió en una entelequia, porque difícilmente los mandos militares de las diferentes tramas golpistas se iban a enfrentar con un Ejército mandado por Fanjul, Franco, Goded y Mola.

No obstante, a pesar de la situación de *impasse* que caracterizó esta fase, hubo un hecho que alteró totalmente a las fuerzas conservadoras: la revolución de octubre de 1934. La posibilidad de que las organizaciones izquierdistas pudieran culminar en un futuro un proyecto político de estas características pasó a ser el mayor temor para un importante sector del Ejército y de la sociedad española, así como para todas las organizaciones políticas de la derecha.

Y esta posibilidad comenzó a convertirse en una realidad en diciembre de 1935, con el estallido de los escándalos Straperlo[26] y Nombela[27], que supusieron el fin del Partido Republicano Radical. Gil-Robles creyó que había llegado el momento de ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se negó a entregarle el poder. Ante esta tesitura, el líder de la CEDA —cuya presencia en el Gobierno en los quince meses anteriores había detenido las diferentes tramas golpistas— sugirió a Fanjul que sondeara a un grupo de generales —Franco, Goded y Varela— para que estudiaran la viabilidad de dar un golpe de Estado. Sin embargo, esto no fue posible por la división existente en el Ejército, la dificultad de contar con la Guardia Civil y la Policía, y la más que probable resistencia de las masas izquierdistas[28]. El fracaso de este intento golpista abrió el camino para que Alcalá-Zamora encargase al republicano liberal Manuel Portela Valladares la formación de un nuevo Gobierno, que se constituyó el 15 de diciembre de 1935. Este Ejecutivo, integrado por republicanos de centro-derecha, no incluía a representantes de la CEDA. Su duración fue efímera, pues no obtuvo la confianza de las Cortes, por lo que el presidente de la República decidió disolverlas el 7 de enero de 1936 y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero.

Militares y carlistas

La convocatoria de los comicios alteró a las fuerzas conservadoras, tanto civiles como militares, pues la izquierda se presentaba agrupada en una coalición denominada Frente Popular (FP). Ante esta tesitura, y a pesar de las diferencias existentes entre ellos, los líderes de Comunión Tradicionalista (CT), CEDA, Partido Republicano Radical (PRR), Renovación Española (RE), Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS) —José Antonio Primo de Rivera—, y de pequeños partidos republicanos conservadores, como el Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD) —Melquíades Álvarez—, el Partido Republicano Conservador (PRC) —Miguel Maura— y el Partido Agrario Español (PAE) —Ángel Alcázar de Velasco—, decidieron negociar entre sí con el objetivo de presentar listas únicas[29], aunque fracasaron en su empeño.

La imposibilidad de que las organizaciones de la derecha se presentaran en coalición favoreció el triunfo del Frente Popular, que ya era visible en la noche del 16 de febrero cuando se conocieron los primeros resultados, y las masas de izquierda ocuparon las calles. El general Franco quiso declarar el estado de guerra con el apoyo de Goded y Rodríguez del Barrio, inspector de la Primera Inspección General del Ejército, pero la oposición del general de división Sebastián Pozas Perea, director general de la Guardia Civil, y la negativa de Alcalá-Zamora a firmar el decreto hicieron fracasar este intento[30]. Al día siguiente, Goded quiso sublevar a las tropas del Cuartel de la Montaña de Madrid. Sin embargo, los oficiales de esa y otras guarniciones se negaron a rebelarse sin la garantía de que la Guardia Civil no se opondría[31].

Estos fracasos abrieron el camino definitivo al Gobierno del Frente Popular, bajo la jefatura de Azaña. A partir de ese momento, los generales anteriormente citados y otros, entendiendo que este era el primer paso para culminar la revolución frustrada en octubre de 1934, decidieron poner en marcha una nueva conspi-

ración militar. Así, el 8 de marzo, el lugarteniente de Goded en la Junta de Generales —este había sido destinado a las Baleares—, el general Rodríguez del Barrio[32], convocó una reunión en Madrid, en el domicilio del agente de Cambio y Bolsa José Delgado y Hernández de Tejada, afiliado a la CEDA, a la que asistieron los miembros de la misma y varios generales conocidos por su enemistad con el Frente Popular, su enfrentamiento con Azaña o su monarquismo: los generales de división Manuel González Carrasco, Franco, Fanjul y Villegas, y los de brigada de Infantería Varela, Mola y Orgaz; de Ingenieros Kindelán, y de Caballería, Ponte, más el teniente coronel Galarza. Esta reunión resultaría clave, ya que se tomaron cuatro decisiones fundamentales[33]:

— Se discutió la naturaleza de la sublevación, llegándose al acuerdo de que sería apolítica.
— Se discutió la estrategia para realizar una operación golpista contra el Gobierno del Frente Popular, triunfando la tesis de Varela del «golpe centrífugo» (controlar Madrid primero y luego el resto del territorio nacional) frente al «golpe centrípeto» (control primero de la periferia para converger sobre Madrid), propuesto por Mola.
— Franco, con el único apoyo de Mola, exigió que el golpe fuera exclusivamente militar, sin connotaciones políticas, y que solo se produjera si se daban alguna de estas tres circunstancias: si Alcalá-Zamora confiaba el Gobierno al líder del sector radical del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Francisco Largo Caballero; si se producía una situación generalizada de anarquía, o si estallaba un movimiento popular que obligase a declarar el estado de guerra.
— Se nombró al teniente general Sanjurjo jefe de la sublevación, ya que era el más veterano y prestigioso de todos ellos. Su representante en Madrid sería Rodríguez del Barrio, el más antiguo de los generales presentes, que

actuaría como jefe de la Junta de Generales, y cabeza en España de la conspiración, hasta la incorporación de Sanjurjo que volvería del exilio.

Esta toma de postura de un sector importante del generalato español no pasó desapercibida a la Comunión Tradicionalista, ya que entre ellos había varios colaboradores del carlismo: el general Varela y el teniente general retirado Manuel Fernández Pérez, «africanista», implicado en la sublevación de Sanjurjo, y que se había entrevistado con Goded en enero de 1936[34]. Ambos debieron de informar a sus amigos políticos de la conspiración que se estaba gestando[35]. Solo así se entiende que, veinte días después de la reunión del 8 de marzo, se activase la Junta Técnica Militar de este partido, que ahora integró a civiles para crear una auténtica división del trabajo en nueve sesiones. En este nuevo proyecto de sublevación se consideraba fundamental la alianza con el Ejército: «El estado de hondísima perturbación en que vive España exige una pronta y enérgica intervención. La Comunión puede realizarla, y en circunstancias propicias encontrará colaboración en el Ejército; más para que ese propósito sea una realidad se requiere un supremo esfuerzo y una firme resolución al mismo tiempo»[36].

A partir de este momento y hasta finales de abril de 1936, la Junta de Generales por una parte y los carlistas por otra pusieron en marcha dos operaciones paralelas, cuyo objetivo era derribar el Gobierno del Frente Popular.

En el caso de los generales, su proyecto se caracterizó por dos importantes aspectos: el primero, la indeterminación y la falta de planificación. Rodríguez del Barrio estaba aquejado de un cáncer terminal de estómago y no tenía fuerzas para dirigir la conspiración, mientras que los otros dos generales de división residentes en Madrid, Fanjul y Villegas, no tenían la capacidad de organización para llevarla a cabo. Al final se impondría Varela, a pesar de ser general de brigada, que propuso un plan que abarcaba las I, IV, V, VI y VII Divisiones Orgánicas y Marruecos. Este plan reci-

bió la aprobación de Sanjurjo[37], pero nunca se pudo realizar. El Gobierno, al tener conocimiento de lo que se proyectaba, destinó a Varela a Cádiz y a Orgaz a Canarias, poniéndoles bajo vigilancia[38].

El segundo aspecto tenía mayor trascendencia. Aunque Sanjurjo era el jefe indiscutible de la trama militar, su edad —sesenta y cuatro años— y su estado físico hacían probable que no mantuviera el liderazgo mucho tiempo una vez que triunfase la sublevación. Este hecho provocaba importantes rencillas entre los dos generales de división más prestigiosos del Ejército, cuya relación, además, no era buena: Franco —cuarenta y tres años— y Goded —cincuenta y tres—, comandantes generales de Canarias y Baleares, respectivamente. El primero reconoció esta situación posteriormente[39]. Pero, además, desde el primer momento intentó imponerse a su rival. Para ello, utilizó a los militares monárquicos implicados en la sublevación, que no confiaban en Goded debido a su ideología republicana y liberal[40]. Así, el teniente coronel Galarza envió una misiva a Sanjurjo poco después de la reunión del 8 de marzo, en la que criticaba muy duramente a Goded y alababa las virtudes de Franco —«los dos pequeños de estatura»—, solicitando para él la jefatura de la sublevación hasta que el teniente general llegara de Portugal[41]:

> Es muy posible que algunos llamados a recoger el instrumento y a actuar con él creyeren en la táctica de G. Robles y rehusasen la acción directa. Es criticable la falta de vista pero nada más, pero otro tan corto de estatura como aquel pero mucho más suelto de palabras alentaba a todo, en todo se metía queriendo ser el Jefe y comiéndose los niños crudos y cuando llegó el momento en dos o tres ocasiones se echó atrás en forma indecorosa; se tiró al suelo y nada hizo como no fuera el manchar a los demás achacándoles la misma carencia de facultades de que él adolece y ha evidenciado una y otra vez. Su cobardía ha sido tal que en los días pasados noticias recibidas por él de la disposición de ciertos elementos fueron ocultados por él al otro pequeño y a los demás que estaban en el ajo. Eso se acabó.

> En cambio, en el primero, aunque tarde, hay verdadera decisión, se ha embarcado en el asunto y va adelante […]. No creo sea una baladronada, por estar fuera del centro y muy alejado de los demás, pues él ha asumido una tarea especial y además la promesa de ir adonde se le mande, teniendo dispuestos los medios para ello […].
>
> Ahora bien, como la labor de preparación y hasta la determinación del momento preciso para actuar no puede hacerse desde ahí, Vd. asigna tal cometido a un Comité formado por Villegas, Varela y Orgaz con un Jefe de E. M. y auxiliares precisos a quien corresponde esa labor. En esto están todos conformes, conviniendo además que si en el momento preciso no estuviera Vd. presente como no estará, fuera Franco el Jefe, y a no estar éste, Villegas. Insisto en decirle a Vd. que esto está hecho de acuerdo con F [Franco].

Desde un punto de vista estrictamente militar, la carta de Galarza era de una enorme impertinencia, ya que la jerarquía castrense impide a un teniente coronel criticar a un general de división, y mucho menos calificarle de «cobarde». No sabemos el efecto que tuvo en Sanjurjo, un militar muy rígido en lo concerniente a la jerarquía militar, y si se molestó en contestarla. Pero sí quedó explicitado en el resto de sus misivas que no siguió el consejo de Galarza, manteniendo al lugarteniente de Goded, el general Rodríguez del Barrio, como jefe de la sublevación en España. Esta decisión de Sanjurjo provocó que Franco decidiera inhibirse de la misma, no queriendo participar en el plan de Varela, como quedó patente en una misiva que el teniente coronel Rada envió a Sanjurjo el 12 de abril de 1936: «Contestación ambigua Franco que le conté esa anterior al haber recibido el plan Varela después de contestado conforme»[42]. Esta posición del futuro dictador se mantendría durante todo el periodo conspirativo, ya que, en ningún momento, el resto de los implicados le ofrecieron una posición de primacía, a pesar de lo que afirmase posteriormente[43].

Por su parte, los carlistas buscaron construir dos frentes para poner en marcha su conspiración. El primero fue el militar, al que intentaron sumar a Sanjurjo. De hecho, pensaron que el teniente general podía encabezar una sublevación del Requeté, a la que se podrían incorporar también un importante sector del Ejército y otras organizaciones políticas antirrevolucionarias. Tras su triunfo, se establecería una regencia encabezada por el príncipe Javier de Borbón-Parma, heredero del pretendiente carlista Alfonso Carlos[44].

Con tal objetivo, Fal Conde y Sanjurjo se entrevistaron en Lisboa a comienzos de mayo. En esta reunión, y según el testimonio manuscrito del teniente general «[Fal Conde] me habló de su deseo de que fuera yo el general que dirigiera un movimiento en Navarra combinado con levantamientos de partidas por el Maestrazgo y también en la frontera de Portugal»[45]. Sanjurjo le explicó que el proyecto nacería muerto si no contaba con el apoyo del Ejército, y que él ya estaba comprometido con sus compañeros de armas. No obstante, indicó al líder carlista que si el Ejército no se sublevaba, la operación podría estudiarse, siempre que se contara con el apoyo de las guarniciones del norte. De hecho, de esta entrevista surgieron tres planes militares para la sublevación del «Requeté», cuyo dato más elocuente fue que los diseñadores de los mismos manejaron la cifra de no más de 8.000 milicianos carlistas en toda España[46].

Junto al militar, el otro frente que debían construir los dirigentes carlistas era el político para conformar una gran coalición de partidos bajo el liderazgo de la Comunión Tradicionalista. Para lograr este objetivo, Fal Conde, que ya tenía sólidas relaciones con la CEDA, pero no tanto con Renovación Española[47], trató de buscar el apoyo de dos organizaciones políticas que disponían de un importante componente juvenil: FE de las JONS y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

FE de las JONS había tenido un gran crecimiento desde febrero de 1936, convirtiéndose en el polo de atracción de la

juventud contraria a la política del Frente Popular. Además, el líder del partido, José Antonio Primo de Rivera —encarcelado desde el 15 de marzo de 1936—, venía apostando por una sublevación militar desde el fracaso de la revolución de octubre de 1934. Por eso envió el 4 de mayo una hoja clandestina titulada «Carta a los militares de España», en la que animaba al Ejército a sublevarse contra el Gobierno. Esta toma de postura del líder fascista animó a los carlistas a buscar el contacto con los falangistas con el fin de crear un frente común capaz de imponer sus condiciones al Ejército. El encargado de reunirse con Primo de Rivera fue un aristócrata, Álvaro Caro y Gillamas, conde de Torrubia, que le presentó —en clave— una propuesta de sublevación conjunta entre carlistas, falangistas y militares, donde los dos primeros grupos impondrían sus condiciones al tercero y también al resto de las fuerzas de la derecha, que se incorporarían tras el triunfo no como partidos políticos —pues todos serían disueltos—, «sino como individuos destacados del mundo de los negocios», formando parte de un Gobierno técnico y apolítico. Además, se añadía «Una advertencia» que resultó premonitoria: «Si no hay una inteligencia previa con los Gómez [militares], y estos han de constituir ellos solos la Dirección interina, queda incierto lo que sucederá luego, no podremos impedir que la interinidad se prolongue, si ellos no quieren ceder, y nos entregaríamos todos a maniobras y forcejeos que pondrían esterilizarlo todo». La respuesta de José Antonio fue totalmente contraria al proyecto carlista y se articulaba en tres puntos: el primero, que aceptaba el liderazgo del Ejército; el segundo, que rechazaba la disolución de los partidos políticos, afirmando que «primeramente sean los militares los que se apoderen de las riendas de la gobernación del Estado, y al cesar estos, venga a sustituirlos, aquel partido que mayor ambiente popular tenga», y el tercero, tal vez el más importante, que se oponía a la monarquía como elemento definidor de la sublevación, dando unas razones que chocaban con la imagen romántica que se ha creado de su persona: «[…] debido a la extrema dure-

za del castigo que obligatoriamente habrá que imponer, para restablecer el equilibrio de la Patria y del principio de autoridad, caiga sobre ella, todo el peso de la responsabilidad, y se aleje con dicho estigma, toda posibilidad de una posible restauración»[48].

Los carlistas fracasaron, por tanto, en su intento de atraer a la Falange. Pero, a la vez que negociaban con el líder de este partido, también lo hacían con los nacionalistas vascos.

El PNV y el proyecto carlista de 1936

El PNV, católico y conservador, ya había entrado en contacto con los conspiradores de la derecha en 1931. Inicialmente, los *jeltzales* habían recibido con ciertas expectativas el nuevo régimen —a pesar del temor que les producía el laicismo republicano—, ya que pensaron que les concedería el ansiado Estatuto de Autonomía para las provincias vascas y Navarra. Por eso, el 24 de abril de 1931, una comisión encabezada por Ramón de Vicuña, presidente del órgano directivo del partido, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), ofreció su colaboración al nuevo Gobierno[49], pero esta posición inicial cambiaría rápidamente como consecuencia de dos acontecimientos. El primero, el conflicto entre el Gobierno republicano y la Iglesia católica, que se manifestaría en dos hechos: la actitud pasiva de las autoridades ante la quema de conventos del 11 de mayo[50] y el conflicto del Ejecutivo con dos prelados: el obispo de Vitoria, el guipuzcoano Mateo Múgica, y el cardenal primado de España, el arzobispo de Toledo Pedro Segura, expulsados de España el 17 de mayo[51] y el 14 de junio[52], respectivamente. El segundo acontecimiento fue el constante enfrentamiento de los militantes del PNV con los de las organizaciones de izquierdas, especialmente del PSOE[53].

Estas circunstancias hicieron que los nacionalistas vascos —con vistas a las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio— se unieran con otros grupos de la derecha (carlistas, inte-

gristas y católicos) en la coalición católico-fuerista llamada Pro Estatuto, cuyo programa se basaba en dos ideas fundamentales: la defensa del catolicismo y de un proyecto propio de autonomía denominado «Estatuto de Estella», que convertía la región vasco-navarra en una entidad cuasi independiente y dotada de su propio concordato con El Vaticano[54]. De hecho, la campaña para las elecciones a Cortes Constituyentes giró en el País Vasco y Navarra en torno a la cláusula religiosa de este documento[55]. La coalición de la derecha derrotó claramente a la republicano-socialista, obteniendo 15 diputados sobre 24 que se elegían —6 del PNV, 5 carlistas y 4 católicos independientes—, y fue el único territorio español donde la derecha venció a la izquierda. Estos diputados conservadores serían conocidos en las Cortes Constituyentes como «minoría vasco-navarra».

Pero la derecha española no se conformaba con establecer una alianza parlamentaria con el PNV, sino que, además, quería vincularlo a su proyecto conspirativo. Así, el general Orgaz, que veraneaba en Deva (Guipúzcoa), fue sondeado por dos católicos vascos —Luis María Villalonga, yerno del gran naviero nacionalista vasco Ramón de la Sota, y José María Urquijo, dueño del influyente periódico de Vizcaya *La Gaceta del Norte*— para que mantuviera una entrevista con dirigentes del PNV a fin de poner en marcha una acción conjunta que destruyera el régimen republicano[56]. El general se interesó por esta propuesta, y el 31 de agosto asistió, en su localidad de descanso, a un mitin del PNV donde quedó impresionado por la disciplina de sus milicias, los *mendigoizales* (montañeros), y escuchó un discurso del dirigente más popular del nacionalismo vasco, José Antonio Aguirre, entonces alcalde de Guecho (Vizcaya) y diputado a Cortes por Navarra. A través de Villalonga, se concertó ese mismo día una entrevista entre el militar y el político *jeltzale*. El encuentro se produjo al día siguiente en Lequeitio (Vizcaya), en casa del simpatizante del PNV José Manuel Aróstegui[57]. Sobre esta entrevista existen dos versiones. Según Aguirre, el general le explicó que la conspira-

ción estaba en marcha y le dijo que se trataba de un movimiento no monárquico cuyo objetivo era derrocar al Gobierno provisional y convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Añadió que deseaba saber si los nacionalistas vascos estaban dispuestos a participar en el mismo[58]. La segunda, la de Orgaz, quien afirmó que Aguirre, tras conocer la conspiración en marcha, le pidió oficiales del Ejército para encuadrar a los *mendigoizales*[59].

Fuera como fuese, lo cierto fue que Aguirre, como militante disciplinado que era, informó al Euzkadi Buru Batzar, y este le autorizó a continuar las reuniones[60]. Así pues, asistió a una segunda entrevista, celebrada en septiembre en San Sebastián (Guipúzcoa), en el domicilio del conde de las Torres, Miguel Osorio y Martos, en la que participaron emisarios del propio Alfonso XIII, como el general Ponte. En este encuentro los monárquicos prometieron al dirigente *jeltzale* la restitución de los fueros a cambio de su ayuda para derribar la Segunda República. Aguirre respondió que «para movimientos de esta clase habían de contar con las autoridades del Nacionalismo Vasco, del cual era yo solo un miembro más o menos conocido por fuerza de las circunstancias»[61]. Esta oferta significaba un giro muy importante, ya que la restitución foral plena era el objetivo fundamental del programa del PNV desde 1906[62]. Tal vez por ello, el Euzkadi Buru Batzar —que dirigía las negociaciones con Aguirre subordinado a sus posiciones— tomaría tres decisiones fundamentales. La primera, en la reunión del 16 de septiembre, donde se acordó hacer una campaña de prensa denunciando la persecución que sufría el PNV a manos del Gobierno republicano, y en contra de una posible revolución comunista en España, tal y como quedó reflejado en el acta de la citada reunión[63]:

> Se acuerda por unanimidad: manifestar ante España y el mundo entero la más enérgica protesta por el trato desigual de que se está haciendo objeto à los afiliados al Partido Nacionalista Vasco, que están siendo víctimas, contra todo elemen-

> tal principio de derecho, de una persecución injusta y arbitraria.
>
> Así mismo, se acuerda ratificar en todas sus partes el último Decreto del Consejo Supremo sobre la suspensión de la Prensa nacionalista, suspensión que continúa, sin que se hayan explicado las causas que puedan justificar tan inexplicable medida […].
>
> El Sr. Fortunato de Agíre informa sobre sus impresiones respecto à posibles derivaciones internacionales en relación con Euzkadi, en previsión del desbordamiento comunista de España. Se acuerda comprobar primeramente la verdad de lo que se dice, y que el mismo señor de Agíre se encargue de las averiguaciones del caso, y dé luego cuenta a este Euzkadi-Buru-Batzar del resultado de sus trabajos.

Párrafos donde implícitamente el Euzkadi Buru Batzar parecía que justificaba un movimiento contra el Gobierno de la República apoyándose en la persecución que estaba sufriendo el partido como organización y, en menor medida, en la posibilidad de una revolución comunista. Curiosamente, Aguirre utilizaría estos mismos argumentos en sus memorias[64].

La segunda decisión fue la ruptura con el Gobierno republicano, ya que el 25 y el 26 de septiembre se debatió en comisión parlamentaria el Estatuto de Estella, decidiéndose que el artículo sobre las relaciones Iglesia-Estado era anticonstitucional, por lo que el texto fue rechazado en su totalidad, acabando así con las ilusiones de los nacionalistas vascos de conseguir el soñado texto de manos del régimen republicano[65].

La tercera decisión, vinculada con la anterior, fue la participación en una nueva reunión con los conspiradores monárquicos. A este encuentro no asistió Aguirre[66], sino Villalonga y una segunda persona que no pudo cruzar la frontera por no llevar su pasaporte[67]. La reunión tuvo lugar en Hendaya (Francia) y en ella participaron el monárquico alfonsino Pedro Sainz Rodríguez y

los carlistas Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, y Rafael de Olazábal. De nuevo, según el testimonio de Villalonga, se ofreció al PNV la restitución de los fueros a cambio de la participación de sus militantes, que serían debidamente armados y organizados, en la insurrección contra el régimen republicano. El representante de los nacionalistas vascos explicó entonces a los monárquicos la propuesta del partido, idéntica a la que repetirían en la primavera de 1936: apoyo a la sublevación, pero sin participación activa en la misma, salvo para mantener el orden en el territorio vasco-navarro, condición que se puso de manifiesto en la nota que se hizo de esta reunión[68]. Los conspiradores monárquicos consideraron que la oferta de colaboración era muy limitada y exigieron un compromiso mayor, que quedaría plasmado en una participación activa de los *mendigoizales*, que Villalonga, un simple emisario, no pudo aceptar.

Esta fue la última reunión del PNV con los conspiradores monárquicos. Aguirre, años después, trató de quitar importancia a estos encuentros tachándolos de «bufonada»[69], e incluso llegó a afirmar que la negativa del partido a comprometerse en este intento de sublevación monárquica salvó al País Vasco y a Navarra de una guerra civil[70]. Sin embargo, la verdadera razón de que estos encuentros finalizaran hay que buscarla en tres acontecimientos. El primero, y fundamental, fue que los conspiradores monárquicos no aceptaron las condiciones de los *jeltzales,* como posteriormente reconoció de forma implícita el propio Aguirre a Manuel Azaña, entonces presidente del Consejo de Ministros, el 1 de diciembre de 1932: «Aguirre me cuenta que el año pasado el Partido Nacionalista fue requerido por los conspiradores monárquicos para ayudarles, entre otros, por el general Orgaz (de ahí vino el que lo confinase yo en Comarcas), pero ellos se negaron porque no les daban garantías para sus aspiraciones»[71]. El segundo, que aparece recogido en el párrafo anterior, fue la desarticulación por las autoridades republicanas de la red tejida por el general Orgaz, lo que hizo imposible la sublevación que se esta-

ba organizando[72]. El tercero fueron las tensiones entre las dos ramas monárquicas, que llevaron a los carlistas a posponer su colaboración con los alfonsinos en una reunión celebrada el 28 de octubre[73].

Tras estos hechos, el PNV comenzó a alejarse de sus antiguos aliados, y culminaría este proceso el 3 de diciembre de 1931, cuando los seis diputados del PNV se entrevistaron con Alcalá-Zamora y le explicaron que pensaban regresar al Parlamento y votar su candidatura a la Presidencia de la República. Don Niceto les dijo que con su actitud habían contribuido a facilitar la política anticlerical de las Cortes, y que debían trabajar para atemperarla y también en favor del Estatuto de Autonomía de acuerdo con el mecanismo propuesto por la Constitución republicana. Los diputados del PNV estuvieron de acuerdo[74].

El 10 de diciembre de 1931, los *jeltzales* cumplieron su palabra y votaron a favor de Alcalá-Zamora como presidente de la República. Este cambio de actitud en los nacionalistas vascos desembocaría en una revolución en su dirección: el moderado y conservador Ramón de Vicuña presentó su dimisión irrevocable como presidente del Euzkadi Buru Batzar y fue sustituido por el anciano y radical Luis de Arana Goiri, defensor del ideario independentista y racista de su hermano Sabino, que consideraba la consecución del Estatuto de Autonomía —incluso mediante el pacto con un Gobierno laico— como el único objetivo del partido[75].

Tras estas decisiones, el PNV había roto con la derecha española y, por tanto, con sus tramas conspirativas[76]. Era el primer giro político que realizaría el partido durante el periodo de la Segunda República, en el que bascularía entre priorizar la defensa del orden social o la consecución de un Estatuto de Autonomía para Navarra y las provincias vascas. Entre 1932 y 1935 se inclinó hacia la segunda opción. Pero a comienzos de 1936 volvió a inclinarse por la defensa del orden social, aunque inicialmente quiso mantener cierta neutralidad en la lucha electoral entre derecha e izquierda.